

Valparaíso, veinte de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

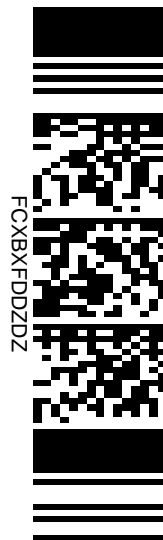
Comparece Inversiones Lucerna Limitada e interpone, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, reclamo de ilegalidad en contra de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N° 545, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, que sindic a al reclamante como contribuyente del impuesto de patente municipal del artículo 23 del Decreto Ley N° 3063, sobre rentas municipales, y solicita: i.- que se declare que tal decreto es ilegal, que se anule el acto y los giros de impuesto correspondientes al año 2020; ii.- que se declare a su parte como una sociedad no afecta al impuesto de patente municipal establecido en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, instruyendo al Municipio a no emitir giro por el pago de patentes, con costas.

El día tres de enero de dos mil veinte la reclamante solicitó a la reclamada que se abstuviera de efectuar el giro de patente contemplado en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, lo que fue rechazado mediante Decreto Alcaldicio N° 91, de diecisiete de enero de dos mil veinte, respecto del cual el actor interpuso reclamo de ilegalidad, el que fue rechazado por el Decreto Alcaldicio N° 545 de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, notificado al reclamante el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

En su reclamación, la reclamante expone antecedentes, detallando que Inversiones Lucerna Limitada (antes Inversiones Lucerna S.A.) ha sido objeto de seis modificaciones a sus estatutos. Indica que el objeto o giro social conforme a los estatutos es el de inversión de naturaleza pasiva en toda clase de bienes corporales e incorporeales, muebles o inmuebles, dineros, acciones o derechos sociales, dejándose expresa constancia de que la sociedad no podrá ejecutar actividad comercial, como tampoco elaboración de bienes.

Señala que esto se ve confirmado con el balance del año 2019, que acompaña, y con lo informado al Servicio de Impuestos Internos, donde se indica que el giro de la reclamante es: “Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras” (Código 643000) y “otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros N.C.P” (Código 661909).

Refiere que la patente municipal establecida en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales es un tributo, por lo que le es aplicable el principio de reserva legal consagrado en la Constitución Política de la República, que implica que sólo el legislador puede definir los supuestos de la obligación tributaria, esto es, sujeto pasivo, hecho gravado, base imponible y tasa del impuesto. Agrega que el hecho gravado en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales es “el ejercicio de toda profesión, industria, comercio, arte o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación”. Las primarias también, en ciertos casos, cuando media algún proceso de elaboración de productos y hay venta directa al público. Indica que la ley se limita a señalar que quedarán gravadas las



actividades secundarias, terciarias, lucrativas y primarias en ciertos casos, sin explicar qué se entiende por tales.

Señala que el Decreto Supremo Reglamentario N° 484, de 1980, del Ministerio del Interior, denominado Reglamento para la aplicación de los artículos 23° y siguientes del título IV de la Ley de Rentas Municipales, complementa la descripción del hecho gravado contemplado en la Ley de Rentas Municipales, atendido el mandato legal contenido en el inciso final del artículo 23 de dicha ley, conforme al cual “El presidente de la República reglamentará la aplicación de este artículo”.

Luego se refiere al contenido del citado Decreto Supremo N° 484, que define las actividades primarias (extracción de productos naturales), secundarias (transformación de materias primas en productos manufacturados u otras en que interviene algún proceso de elaboración) y terciarias, que según la letra c) del artículo 10, son *“aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias, tales como comercio por mayor y menor, nacional o internacional, representaciones, bodegajes, financieras, servicios públicos o privados estén o no regulados por leyes especiales, consultorías, servicios auxiliares de la administración de justicia, docencia, etc.”*

Al respecto señala que, por aplicación del principio de reserva legal, queda vedado a cualquier otro organismo regular por vía distinta a la legal los elementos esenciales de la obligación tributaria, entre ellos el hecho gravado. Asimismo, señala que la falta de determinación de la ley en cuanto a qué debe entenderse por actividades secundarias y terciarias, actividades que constituyen en sí mismas el hecho gravado del impuesto de patente municipal, determina la inexistencia de un tributo para aquellas actividades que no se encuentran expresamente definidas por el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, es decir, para las actividades pasivas de inversión. Añade que la delegación que hace el inciso final del artículo 23 del Decreto Ley N° 3063 no puede referirse a ningún elemento de la obligación tributaria, como es la descripción del hecho gravado y el sujeto pasivo del mismo.

Expone que con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.210, la cual, en su artículo 31, introdujo un inciso tercero, nuevo, en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, que dice: *“También quedarán gravadas con esta tributación municipal las empresas o sociedades de inversión que adquieran o mantengan activos o instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del dominio, posesión o tenencia a título precario como, asimismo, de su enajenación.”*. En relación con ello, el artículo 47 transitorio de la citada Ley N° 21.210 dispone que *“La modificación al artículo 23 del decreto ley N° 3.063 de 1979 que contempla el artículo trigésimo primero de la presente ley, regirá a partir del 1° de julio de 2020. Esta modificación al hecho gravado tiene por único objeto dar certeza jurídica, a partir de la fecha de su entrada en vigencia, sobre la legítima diferencia de la interpretación del mencionado artículo en su texto vigente hasta el 30 de junio de 2020. De esta forma, respecto de la contribución de patente municipal devengada en períodos anteriores a la vigencia de esta modificación, regirá el texto vigente hasta esa*



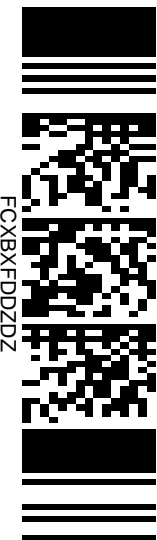
fecha. En consecuencia, no podrá fundarse en esta modificación legal solicitudes de devolución o cobro de la contribución de patente municipal, respecto de periodos anteriores a la vigencia de la modificación que contempla la presente ley ni afectará procedimientos administrativos ni jurisdiccionales en curso o que se promuevan en forma posterior respecto de dichos periodos.”

Expresa que se podría concluir, con la nueva redacción del artículo 23 citado, que, con anterioridad a esta modificación, no estaban gravadas por este tributo las empresas o sociedades de inversión que adquieran o mantengan activos o instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del dominio, posesión o tenencia a título precario como, asimismo, de su enajenación. Señala que, si bien el artículo 47 transitorio establece una limitación, ella sólo se refiere a que no se pueda fundar una solicitud o cobro de impuesto en esta modificación legal, pero sí podría utilizarse como un argumento más, por la parte interesada.

Afirma que es evidente que, si una ley modifica otra es para regular algo de forma distinta. En este caso particular, lo que hace el artículo 31 de la Ley N° 21.210 es complementar el hecho gravado en la Ley de Rentas Municipales, incluyendo como sujetos pasivos de dicho tributo a las empresas o sociedades de inversión que adquieran o mantengan activos o instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del dominio, posesión o tenencia a título de precario como, asimismo, de su enajenación.

Respecto a la ilegalidad del acto reclamado, señala que el giro ejecutado por la reclamante no está comprendido en el hecho gravado descrito en la Ley de Rentas municipales. Las sociedades que ejercen actividades de inversión de carácter pasivo son aquellas cuyo giro consiste en la adquisición de toda clase de bienes con fines rentísticos, sea cual fuere la forma jurídica en que los adquiera el inversionista, por no involucrar la producción de bienes, ni la prestación de servicios ni el comercio de bienes. Como indica en el primer acápite de la reclamación, alega que ese es precisamente el giro y la actividad desplegada por la reclamante durante el año 2019. Continúa indicando que este tipo de actividades (de inversión pasiva) no cabe en la clasificación de aquellos hechos gravados contenidos en el artículo 23 de la Ley sobre Rentas Municipales, ni tampoco pueden ser calificadas como una actividad lucrativa de las que en dicho cuerpo normativo se señala. Por lo anterior, afirma, este tipo de actividades no constituye el hecho gravado para los efectos del pago de la patente municipal, lo que se conservará de este modo mientras no cambien las circunstancias y se dediquen a la compra y venta de acciones o fondos mutuos, ya que estas actividades caben dentro de las actividades terciarias y por lo tanto, son sujeto del impuesto.

Refiere que el acto reclamado es ilegal, pues pretende aplicar un impuesto a una sociedad que no ejecuta el hecho gravado descrito en la Ley de Rentas Municipales. El acto reclamado sindic a esta parte como contribuyente de la Ley de Rentas Municipales por dos motivos: en primer lugar, por entender que toda actividad de la que se obtenga lucro estaría gravada con este tipo de impuesto y, en segundo lugar, por calificar a la actividad efectuada por la Sociedad como una actividad terciaria.



Sigue exponiendo que, en su opinión, la obtención de lucro no configura el hecho gravado en la Ley de Rentas Municipales. El acto reclamado, en su considerando 14, señala que: "...no importa si la sociedad de inversión participa activamente en la gestión de negocios, o si sólo es rentista de inversiones, lo que importa, a ojos del legislador, es si dicha sociedad persigue la obtención de una utilidad o ganancia. A juicio del reclamante yerra el acto reclamado, pues el impuesto no grava a las distintas formas de organización empresarial, por el solo hecho de serlo o por la simple obtención de lucro, sino que el ejercicio efectivo de las actividades señaladas en el artículo 23 de la ley de Rentas Municipales. En efecto, si la obtención de lucro constituyera el hecho gravado de este impuesto la ley no habría dicho nada más, y no se habría referido a ningún tipo de actividad en específico. De la simple lectura del artículo en comento se desprende para dicha parte que el hecho gravado no es la obtención de lucro, sino la ejecución de las actividades que la ley describe, esto es: "el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación...". Por lo tanto, el hecho gravado no consiste en "cualquiera actividad lucrativa", como parece entender el acto reclamado (la cual olvida las calificaciones legales de secundaria y terciaria), sino en "cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria". Por lo tanto, no cualquier actividad lucrativa se encuentra gravada, sino solamente aquellas secundarias o terciarias.

Indica que, no obstante que las actividades primarias, secundarias y terciarias no tienen definición en el Decreto Ley N° 3063, y que en este sentido el Decreto Supremo 484 sería inconstitucional, aun si entendiéramos que es constitucional y válido, sucede que la actividad de su parte no cabe dentro de la definición de actividades primarias, secundarias ni terciarias.

Expresa que el acto reclamado califica la actividad de su representada como terciaria, pues señala en su considerando 28, que: *"...su giro comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas y por consiguiente configuran un hecho gravado en el citado artículo 23, toda vez que se trata de actividades terciarias."* Y en su considerando 30, afirma que: *"...las sociedades de inversión no son actividades primarias ni secundarias, si son actividades lucrativas, entonces según el artículo 2 del reglamento caen dentro del conjunto de actividades terciarias"*.

Pero sucede que ello no se corresponde con la definición que da de actividades terciarias el artículo 2° letra c) del citado Decreto Supremo 484, que dice: *"consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias, tales como comercio por mayor y menor, nacional o internacional, representaciones, bodegajes, financieras, servicios públicos o privados estén o no regulados por leyes especiales, consultoras, servicios auxiliares de la administración de justicia, docencia, etc."*. Esto es, se trata únicamente de actividades de comercio, distribución de bienes o prestación de servicios de todo tipo, ninguno de los cuales es el giro de la reclamante.



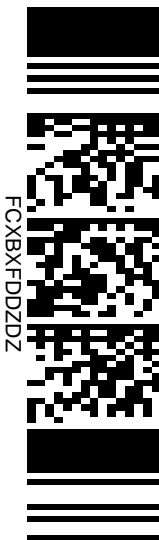
Termina solicitando que se declare que el Decreto Alcaldicio N° 545, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, es ilegal, por lo que pide que se anule, así como también los giros de impuesto correspondientes al año 2020, al tiempo que se declare a su representada como una sociedad no afecta al impuesto de patente municipal establecido en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, instruyendo al Municipio a no emitir giro por el pago de patentes, con expresa condena en costas.

En su contestación, la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad municipal deducido en su contra, por las razones que expone. Señala que, conforme al artículo 7° de la Constitución Política de la República, la entidad edilicia sólo puede realizar lo que emana de las disposiciones legales, y una de sus facultades es justamente el cobro de patentes comerciales, cuya piedra angular es el Decreto Ley N° 3603 con su respectivo reglamento, específicamente su articulado 23, el que cita.

Agrega que el legislador, en el Decreto Ley en comento, no hace una diferenciación en el hecho gravado, respecto al tipo o conformación de la entidad social, es decir, si esta es una persona natural, comunidad y/o sociedad, ni tampoco se refiere a su objeto societario, o si se trata de un inversionista activo o pasivo, sino que atiende a la búsqueda del lucro de la actividad que ejerce dicho contribuyente, es decir, si produce utilidad o ganancia con su actividad, eso es lo relevante. Añade que todas las sociedades, sean civiles o comerciales, lo que ejercen es una actividad lucrativa, que es lo que las distingue de las corporaciones y fundaciones, y en el caso del reclamante su “giro social” sí corresponde a una “actividad lucrativa”.

Por otro lado, se refiere al aforismo jurídico que dice: “cuando el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir”, pues en este caso el legislador sí distinguió, cuando estableció el artículo 27 del Decreto Ley 3063, que se refiere a quienes se liberan del pago de impuesto edilicio, al indicar: “sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios”, siendo evidente que el actor no está dentro de estos supuestos de excepción. Concluye que es la propia ley y su reglamento las que dan solución a la disyuntiva suscitada.

Refiere que parte de la argumentación del reclamante es que el Decreto Supremo N° 484 no puede referirse al hecho gravado, por el principio de reserva legal, pero destaca que este Reglamento fue dictado por el Presidente de la República en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Política, para la ejecución de las leyes, en el artículo 32 N° 6, que tiene por objeto dar certeza y seguridad en la aplicación de las leyes por parte de sus destinatarios. Indica que el Tribunal Constitucional ha resuelto que esta forma de regulación es constitucional, en la medida en que exista una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos, según sentencia Rol N° 370, de 9 de abril de 1997. En este sentido, el Decreto Supremo N° 484 no se habría excedido en su función de complementar el artículo 23 del Decreto Ley N° 3063, pues el concepto que dio de actividad terciaria se



corresponde con el espíritu que la ley le ha dado a esta regulación, a través de una separación clásica de las actividades económicas, dentro de las cuales se comprenden las actividades lucrativas realizadas por las sociedades de inversión.

Expone que la controversia emerge de aquella parte de la norma que amplía el hecho gravado, a saber, “artículo 23 (D.L. 3.063) o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria”. Pero indica que un hecho no controvertido es que el actor es una sociedad que tiene como objeto efectuar todo tipo de inversiones en inmuebles y capitales mobiliarios y los demás negocios rentísticos y de mera inversión que decidan sus administradores. Señala que ello demuestra que su giro comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas y, por consiguiente, configuran un hecho gravado en el citado artículo 23, toda vez que se trata de actividades terciarias, de acuerdo a la definición del artículo 2° del Decreto Supremo N° 484, que constituye el Reglamento para la aplicación de los artículos 23 y 24 del Decreto Ley N° 3063.

Concluye que el trabajo consiste en determinar qué se entiende por actividad terciaria, y que el reglamento (D.S. N° 484, de 1980) expresamente señala: “Artículo 2°. Se entenderá por: c) Actividades Terciarias: Son aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias, tales como comercio por mayor y menor, nacional o internacional, representaciones, bodegajes, financieras, servicios públicos o privados estén o no regulados por leyes especiales, consultorías, servicios auxiliares de la administración de justicia, docencia, etc.”

Expone que toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias ciertamente abre la puerta para actividades ejercidas por las sociedades de inversión, y sólo con un proceso lógico, se puede deducir que “las sociedades de inversión no son actividades primarias ni secundarias, sí son actividades lucrativas, entonces según artículo 2 del reglamento caen dentro del conjunto de actividades terciarias”. Entonces, bajo la pregunta del recurrente, las actividades de las sociedades de inversión son subsumibles dentro de la segunda parte del hecho gravado.

Señala que la sociedad escuda su solicitud de exención en que no realiza actividad comercial o prestación de servicios, pero aquello es irrelevante cuando la propia norma amplía su rango de acción, no realizando nunca una clasificación taxativa, y esto se refleja tanto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, como en el artículo 2 del reglamento pertinente, donde la búsqueda o fin de lucro es el elemento relevante y, como dice la recurrente en su libelo, “el fin social es la obtención de rentabilidad en su actividad”.

Que refuerza lo anterior la circunstancia de que el artículo 27 del Decreto Ley N° 3063 establece quiénes están exentos del pago de patente municipal, sin que se pueda subsumir en dichas figuras la de la reclamante.

Continúa indicando que el Decreto N° 187, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, aprobó el Documento "Clasificador Chileno De Actividades Económicas, CIIU4.CL 2012,



Norma Técnica". Norma técnica oficial de nuestro país, contempla como actividades financieras y de seguros, y por tanto actividades terciarias, a "64.300. Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares. Esta subclase comprende las actividades de entidades jurídicas organizadas para la mancomunidad de valores u otros activos financieros, sin gestión, en nombre de accionistas o beneficiarios. Las carteras se adaptan a especificaciones concretas para lograr determinadas características; por ejemplo, de diversificación, riesgo, rendimiento y variabilidad de precio. Esas entidades obtienen intereses, dividendos y otras rentas de la propiedad, pero tienen pocos empleados y no obtienen ingresos por concepto de venta de servicios". También, dicho clasificador comprende, las actividades financieras y, por tanto, terciarias: "64.200. Actividades de sociedades de cartera. Esta subclase comprende las actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta subclase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran, ni gestionan otras unidades".

De acuerdo con todo lo anterior, Inversiones Lucerna S.A. sería de aquellas sociedades que ejercen una actividad terciaria, y conforme nuestro Código Civil, "Art. 19 Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu". Señala que, en razón de lo expuesto, las sociedades de inversiones se encuentran comprendidas dentro del concepto de actividad terciaria y, por lo mismo, se encuentran obligadas al pago de patente municipal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley N° 3063, sin que pueda efectuarse la distinción acerca de si se trata de sociedades de inversión pasiva o no, toda vez que donde el legislador no distingue no es lícito al intérprete distinguir. Finalmente, cabe tener presente el efecto relativo de las sentencias judiciales. Termina solicitando el rechazo del reclamo de ilegalidad.

Con fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos a probar los siguientes:

- 1).- Si la actividad de la sociedad reclamante se encuentra comprendida dentro de las actividades terciarias señaladas en el Decreto Ley N° 3063, sobre rentas municipales. Hechos, antecedentes y circunstancias.
- 2).- En la afirmativa del punto anterior, si la sociedad reclamante está obligada a pagar patente municipal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley N° 3063, de rentas municipales. Hechos, antecedentes y circunstancias.

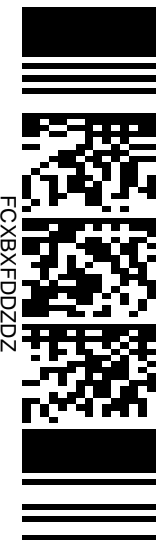
Las partes rindieron la siguiente prueba:

I.- Demandante

1.- Documental

1) Copia del Decreto Alcaldicio N° 545, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, emitido por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, señor Fernando Rodríguez Larraín;

2) Copia del correo electrónico enviado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, enviado por doña Sofia Honorato, abogada del Departamento de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, a doña Paulina Gómez Maluje, representante de Inversiones Lucerna Limitada;



3) Copia del reclamo de ilegalidad deducido por Inversiones Lucerna Limitada con fecha dieciocho de marzo de dos mil veinte en contra del Decreto Alcaldicio N° 091, de diecisiete de enero de dos mil veinte, emitido por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, señor Fernando Rodríguez Larraín;

4) Copia de la resolución municipal que consta de Decreto Alcaldicio N° 091, de fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, emitido por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, señor Fernando Rodríguez Larraín;

5) Copia del Balance de Inversiones Lucerna Limitada correspondiente al periodo terminado comprendido entre el uno de enero de dos mil diecinueve y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve;

6) Copia de la información tributaria de Inversiones Lucerna Limitada obtenida de la página web del Servicio de Impuestos Internos;

7) Copia de la escritura pública otorgada el veintidós de diciembre de dos mil catorce en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, en cuyo artículo segundo consta la cláusula estatutaria referente al giro social;

8) Copia de la escritura pública otorgada el diez de septiembre de dos mil diecinueve en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo;

9) Declaración emitida por TMF Chile Asesorías Empresariales Limitada con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno

II.- Demandada

1.- Documental

1) Listado del Servicio de Impuestos Internos de Capital Propio, año 2020, para sociedades en la comuna de Santo Domingo;

2) Listado de servicio de impuestos internos de Actividad Económica, año 2020, para sociedades en la comuna de Santo Domingo;

3) Consulta situación tributaria de terceros, empresa Inversiones Lucerna Limitada, de julio de dos mil veintiuno.

2.- Oficio del Servicio de Impuestos Internos, con información en el sentido de que la reclamante tributa renta en primera categoría.

Por resolución, de seis de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó remitir los antecedentes a la Fiscalía Judicial para evacuar informe.

CONSIDERANDO:

Primero: Que para resolver el presente reclamo de ilegalidad, se hace necesario esclarecer si la reclamante se encuentra afecta al pago de patente municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales.

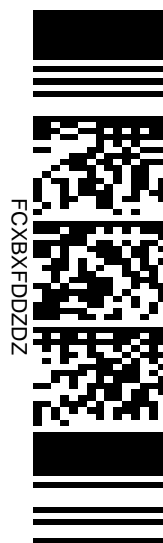
Segundo: Que según lo que indica dicho precepto, “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley” (inciso primero). “Asimismo, quedarán gravadas con esta tributación municipal las actividades primarias o extractivas en los casos de explotaciones en que medie algún proceso de elaboración de productos, aunque se trate de los exclusivamente provenientes del respectivo fundo rústico, tales como



aserraderos de maderas, labores de separación de escorias, moliendas o concentración de minerales, y cuando los productos que se obtengan de esta clase de actividades primarias, se vendan directamente por los productores, en locales, puestos, kioscos o en cualquiera otra forma que permita su expendio también directamente al público o a cualquier comprador en general, no obstante que se realice en el mismo predio, paraje o lugar de donde se extraen, y aunque no constituyan actos de comercio los que se ejecuten para efectuar ese expendio directo” (inciso segundo). “También quedarán gravadas con esta tributación municipal las empresas o sociedades de inversión que adquieran o mantengan activos o instrumentos, de cualquier naturaleza, de los cuales puedan obtener rentas derivadas del dominio, posesión o tenencia a título precario como, asimismo, de su enajenación” (inciso tercero). “El Presidente de la República reglamentará la aplicación de este artículo” (inciso cuarto).

Tercero: Que, en cumplimiento del inciso final del citado artículo 23, fue dictado el Decreto Supremo N° 484, de 1980, del Ministerio del Interior, en cuyo artículo 2° se ordena entender, para la aplicación de lo dispuesto en aquel artículo 23, por: “a) Actividades Primarias: Todas aquellas actividades económicas que consisten en la extracción de productos naturales, tales como agricultura, pesca, caza, minería, etc. Este concepto incluye, entre otras actividades, la crianza o engorda de animales. El concepto de actividad primaria se extiende a las labores de limpieza, selección y embalaje y demás que sean previas a éste, que efectúe directamente el dueño de los productos provenientes de la explotación de una actividad primaria. Asimismo se comprenden en este concepto, los actos tendientes a la liquidación y venta de los productos provenientes de alguna actividad primaria, efectuados directamente por el productor, aun cuando sean realizadas en oficinas o locales situados fuera del lugar de extracción, ya sean urbanos o rurales. b) Actividades Secundarias: Todas aquellas que consisten en la transformación de materias primas en artículos, elementos o productos manufacturados o semifabricados y en general todas aquellas en que interviene algún proceso de elaboración, tales como industrias, fábricas, refinerías, ejecución y reparación de obras materiales, instalaciones, etc. c) Actividades Terciarias: Son aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias, tales como comercio por mayor y menor, nacional o internacional, representaciones, bodegajes, financieras, servicios públicos o privados estén o no regulados por leyes especiales, consultorías, servicios auxiliares de la administración de justicia, docencia, etc.”

Cuarto: Que la actividad de inversión pasiva ha sido definida, para los efectos fiscales, como aquella que consiste en la adquisición de toda clase de bienes con fines rentísticos, cualquiera sea la forma jurídica que adquiera el inversionista. Tal actividad, en tanto no involucre la producción de bienes ni la prestación de servicios, no configura el hecho gravado previsto en el citado artículo 23, pues esta disposición no grava todas las actividades lucrativas. Las sociedades de inversión pasiva se encuentran gravadas sólo en la medida en que ejerzan alguna actividad de producción de bienes o prestación de servicios. Así lo han reconocido, tanto la jurisprudencia judicial de la



Excma. Corte Suprema (sentencias roles N° 29.663-2018, N° 5.272-2018, y N° 12.129-2019) y de esta misma Corte de Apelaciones (sentencia rol N° Civil 2697-2020), como la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República (dictamen N° 27.667, de 25 de mayo de 2020).

Quinto: Que, de los antecedentes acompañados al proceso, en especial de la escritura social de la reclamante, se desprende que esta es, precisamente, una sociedad cuyo giro corresponde a la inversión de naturaleza pasiva en toda clase de bienes corporales e incorporeales, muebles o inmuebles, dineros, acciones y derechos sociales, dejándose expresa constancia en aquella del hecho de que no podrá ejecutar actividad comercial, como tampoco de elaboración de bienes.

Sexto: Que, así las cosas, en atención a que no se ha establecido que la reclamante realice actividades que se encuentren gravadas por el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, esta Corte, compartiendo el parecer del Fiscal Judicial, expresado en su informe de trece de marzo de dos mil veintitrés, estima que el Decreto Alcaldicio N° 545, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, no se ajusta a la normativa legal, por lo que el reclamo deducido en su contra será acogido.

Séptimo: Que no se condenará en costas a la reclamada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

- I. **Se acoge, sin costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por Inversiones Lucerna Limitada en contra de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar.
- II. Se dejan sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 545, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo y los giros de impuesto por patente municipal de la reclamante correspondiente al año 2020.
- III. Se declara que la reclamante no se encuentra afecta al impuesto de patente municipal establecido en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales.

Acordado con el voto en contra del **Ministro Sr. Alejandro García Silva**, quien fue del parecer de rechazar el presente reclamo de ilegalidad, por estimar que el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales no efectúa distingos que permitan excluir a la reclamante del ámbito de obligados al pago del impuesto allí previsto.

Regístrese, comuníquese y, ejecutoriada que sea, archívese.

Redacción del abogado integrante Sr. Guillermo Oliver Calderón.

Se deja constancia que el abogado integrante Sr. Oliver, no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por no integrar el día de hoy.

N° Contencioso Administrativo-22-2020.





FCXBXFDDZDZ

Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por Ministro Alejandro German Garcia S. y Ministro Suplente Rodrigo Cortes G. Valparaíso, veinte de junio de dos mil veintitrés.

En Valparaíso, a veinte de junio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

